



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Radicado: 05001-31-05-015-2019-00157-01 (O2-22-455)
Accionante: CAROLINA MARTÍNEZ MONTOYA y SANTIAGO MARTÍNEZ MONTOYA
Accionada: COLPENSIONES E.I.C.E.
Llamada en Garantía: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN
Procedencia: JUZGADO QUINCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Providencia: SENTENCIA No. 143
Asunto: RELIQUIDACIÓN PENSIÓN DE SOBREVIVENTES

En Medellín, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés (2023), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-015-2019-00157-01 (O2-22-455) instaurado por SONIA DORIS MONTOYA LÓPEZ, CAROLINA MARTÍNEZ MONTOYA y SANTIAGO MARTÍNEZ MONTOYA, en contra de COLPENSIONES E.I.C.E. y donde se vinculó como llamada en garantía a las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN -EPM-, con el fin de resolver el recurso de apelación que fuera propuesto por la litigiosa por activa contra la sentencia que fulminó la primera instancia, proferida el 30 de noviembre de 2022 por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, “[p]or medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones”, se adopta la decisión correspondiente mediante la presente providencia escrita, cuya ponencia fue previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

1. ANTECEDENTES

Los señores SONIA DORIS MONTOYA LÓPEZ, CAROLINA MARTÍNEZ MONTOYA y SANTIAGO MARTÍNEZ MONTOYA actuando a través de gestor judicial, promovieron demanda ordinaria laboral en contra de COLPENSIONES E.I.C.E., en punto a obtener la

reliquidación de la pensión de sobrevivientes que actualmente disfrutan con ocasión a la muerte del señor Francisco José Martínez Osorio, reclamando la aplicación de los requisitos previstos en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de esa anualidad para la causación de la prestación pensional, tomando como IBL el 75% de lo devengado durante el último año de servicios, como lo dispone la Ley 33 de 1985¹; todo ello en aplicación del régimen de transición pensional previsto en la Ley 100 de 1993 y la condición más beneficiosa.

En respaldo de sus aspiraciones señalaron que el señor Francisco José Martínez Osorio prestó sus servicios en el sector público, laborando con las Empresas Públicas de Medellín entre el 7 de febrero de 1979 al 2 de julio del 2000, para un total de 1.073 semanas; que al 1° de abril de 1994, data en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993, contaba con más de 15 años de servicios, siendo por tanto beneficiario del régimen de transición pensional. Acotaron que, por haber laborado por más de 20 años en el sector público, la prestación pensional debe ceñirse a lo previsto en la Ley 33 de 1985.

Informaron que, a partir del 02 de julio del 2000, el extinto Instituto de Seguros Sociales a través de la resolución nro. 11536 del 21 de septiembre de 2001 y por motivo del deceso del señor Martínez Osorio, les reconoció la pensión de sobrevivientes de origen común con base en el artículo 48 de la Ley 100 de 1993 en su redacción original, en las cuantías y porcentajes que se detallan:

| BENEFICIARIO | CALIDAD | PORCENTAJE | CUANTÍA |
|---------------------------|---------|------------|---------------|
| Sonia Doris Montoya López | Cónyuge | 50% | \$ 404.883,50 |
| Carolina Martínez Montoya | Hija | 25% | \$ 202.441,75 |
| Santiago Martínez Montoya | Hijo | 25% | \$ 202.441,75 |

Asentaron que, al haber cumplido el causante Francisco José Martínez Osorio la densidad de semanas exigidas por el Acuerdo 049 de 1990, antes del advenimiento de la Ley 100 de 1993, resulta cobijado por la condición más beneficiosa para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, y por ende, asistiéndoles derecho a sus pedimentos.

1.1. Trámite de primera instancia

La demanda se admitió el 1° de septiembre de 2016 ante el Juzgado Dieciséis Administrativo Oral de Medellín (págs,151 a 152, doc.01, carp.01), y se notificó a la administradora del

¹ La pretensión del escrito demandatorio responde al siguiente tenor: “[s]e ordene a la demandada proferir resolución que liquide nuevamente y reconozca la pensión de sobreviviente conforme a los artículos 20 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, se liquide una pensión de sobreviviente equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio, incluyendo todos los factores salariales, por ser el cónyuge de la demandante acreedor del régimen de transición de la Ley 33 de 1985 y en aplicación del precedente judicial del Consejo de Estado mediante sentencia de unificación jurisprudencial 25000-23-25-000-2006-07509-01 (0112-09) del 4 de agosto de 2010, ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila. Autorizada la publicación con oficio 2012EE42734 o 1 de 26 de marzo de 2012.

RPMPD el 19 de septiembre de esa anualidad (pág.159, doc.01, carp.01), la que, al momento de dar respuesta al escrito incoativo planteó oposición a la prosperidad de los pedimentos, aceptando como ciertos los hechos que hacen referencia a la calidad de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, el monto del derecho pensional y la respuesta brindada a la reclamación administrativa presentada, aduciendo no constarle los demás, no sin antes llamar en garantía a las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN ESP. En su defensa, propuso con el carácter de perentoria las excepciones de cobro de lo no debido, pago y compensación, improcedencia de la indexación de las condenas, buena fe e imposibilidad de condena en costas (págs.162 a 200, doc.01, carp.01).

La llamada en garantía refutó las pretensiones de la demanda y del llamamiento, planteando como medios defensivos las excepciones de inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva de EPM, pago, prescripción, falta de competencia por ausencia de jurisdicción, falta de legitimación en la causa por pasiva de EPM para reliquidar pensiones, legalidad, firmeza y validez de los actos administrativos individualizados en las pretensiones de la demanda expedidos por COLPENSIONES (antes ISS), caducidad de la acción, nulidad por falta de jurisdicción y competencia, prescripción y la genérica (págs.213 a 250, carp.01, doc.01)

1.2. Decisión de Primera Instancia

La controversia planteada se dirimió en primera instancia el 30 de noviembre de 2022 (docs.24 a 25, carp.01), mediante sentencia proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, con la que absolvió a la convocada a juicio de los pedimentos formulados en su contra por los señores SONIA DORIS MONTOYA LÓPEZ, CAROLINA MARTÍNEZ MONTOYA Y SANTIAGO MARTÍNEZ MONTOYA, gravándolos en costas (minuto 41:35 a 58:21, doc.24, carp.01).

Para sustentar su decisión, la juez unipersonal de primer grado luego de explicar el régimen de transición pensional y el principio de la condición más beneficiosa, aseguró que, el IBL de las prestaciones económicas que se reconozcan con base en una normatividad anterior, se obtiene con arreglo a lo establecido por la Ley 100 de 1993, no siendo dable acudir a reglamentos o disposiciones legales diferentes.

1.3. Recurso de Apelación

La poderhabiente judicial de los señores SONIA DORIS MONTOYA LÓPEZ, CAROLINA MARTÍNEZ MONTOYA Y SANTIAGO MARTÍNEZ MONTOYA se mostró en desacuerdo con

la decisión adoptada por la *a quo*, solicitando se revoque la misma y se acceda a los pedimentos formulados en el libelo gestor.

Con tal propósito, además de ratificarse en los argumentos expuestos en etapa de alegatos de instancia, sostiene que el causante señor Francisco José Martínez Osorio al momento de su muerte dejó causado la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985, a la par que, a la fecha del advenimiento de la Ley 100 de 1993, totalizó más de 750 semanas cotizadas; coligiendo que es beneficiario del régimen de transición pensional. Ulteriormente, solicita se revise el monto fijado por concepto de agencias en derecho, pues su prohijada percibe una mesada pensional igual a un SMLMV y, por tanto, no cuenta con los recursos económicos para sufragar el valor dispensado por la *a quo* (minuto 58:33 a 59:57, doc.24, carp.01).

1.4. Trámite de Segunda Instancia

El recurso de apelación fue admitido el 14 de diciembre 2022 (doc.02, carp.02), y mediante proveído del día 12 de enero de 2023 (doc.03, carp.02) se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, ejercieran su derecho a la presentación de las alegaciones de conclusión por escrito, de considerarlo del caso; empero, los contendientes guardaron silencio.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el extremo litigioso por activa, advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del CPTSS, el estudio de la sentencia impugnada se limitará a los puntos de inconformidad materia de alzada.

2.1. Problema jurídico

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala se contrae a establecer si a los deprecantes les asiste derecho a la reliquidación de la pensión de sobrevivientes que actualmente perciben, de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley 33 de 1985 y en el Acuerdo 049 de 1990 expedido por el ISS, en consonancia con lo delineado jurisprudencialmente frente al principio de la condición más beneficiosa.

2.2. Sentido del Fallo – Tesis de la Sala

La Sala confirmará la decisión de primer grado, considerando que como colofón del ejercicio ponderativo de las probanzas allegadas con la demanda, y los demás medios de convicción incorporados y practicados en sede judicial, el afiliado fallecido dejó causada la prestación económica de sobrevivientes en favor de su beneficiarios y al trasluz de la norma que se encontraba vigente al momento del deceso, por tanto, no resulta jurídicamente procedente acudir a una disposición legal distinta ni aun bajo el principio de la condición más beneficiosa. De igual modo, antes del sobrevenir el óbito del señor Francisco Martínez Osorio, este tampoco cumplía con los presupuestos exigidos para hacerse acreedor a la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985, y en esa medida, no había lugar a dispensar la reliquidación deprecada.

2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado

La carga de la prueba es un principio de derecho procesal, encaminado a establecer a cuál de los sujetos del proceso le concierne la aportación de las pruebas, y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan del incumplimiento de dicha carga; en su criterio clásico la carga de probar se ha fijado en cabeza de quien afirma los hechos que fundamentan la procedencia del reconocimiento de los derechos debatidos, correspondiéndole al mismo, probar sus aserciones para que el juzgador establezca si es procedente el reconocimiento de los derechos que reclama, debiéndose desestimar sus pretensiones en caso de que los hechos no aparezcan probados en el proceso.

El concepto prístino de la carga probatoria se compendia en el aforismo romano *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, según el cual, quien afirma un hecho debe probarlo, y quien lo niega, está libre de la carga de probar, regla procesal que guarda concordancia con las previsiones contenidas en el artículo 167 del CGP, aplicable por remisión analógica a los juicios del trabajo y de la seguridad social, en los términos previstos en el artículo 145 del CPTSS, y por cuya virtud, le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Previo a dirimir la litis planteada, se advierte que no son objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos establecidos en primera instancia: que el señor Francisco José Martínez Orozco falleció el 02 de julio del 2000; que el Instituto de Seguros Sociales en resolución nro. 11536 del 21 de septiembre de 2001 reconoció a favor de los deprecantes la pensión de sobrevivientes con ocasión de la muerte del señor Martínez Osorio a partir del 02 de julio del 2000 y bajo la égida del artículo 48 de la Ley 100 de 1993 (págs.35 a 44, 316 a 321 y 349 a 354, doc.01, carp.01); que el causante a partir del 08-feb-1979 cotizó para los riesgos de IVM al Instituto de Seguros Sociales un total de 660,57 semanas (doc.GRP-SCH-HL-

66554443332211_836-20160921052837.pdf, subcarp.05, carp.01) ; y que prestó sus servicios a favor de las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP -EPM- en calidad de trabajador oficial entre el 7 de febrero de 1979 y el 02 de julio del 2000 (pág.237, doc.01, carp.01).

2.4. De la Reliquidación de la Pensión de Sobrevivientes

La pensión de sobrevivientes fue concebida para garantizar a los familiares del afiliado o pensionado fallecido, una estabilidad económica que permita asegurar su subsistencia en condiciones dignas, máxime, cuando dicha prestación es la única fuente de ingreso de sus beneficiarios, que tiene por fin evitar una situación de desamparo. Su consagración legal parte del principio de estabilidad económica y social del grupo familiar del causante, según el cual la prestación corresponde a la necesidad de mantener para sus beneficiarios el mismo grado de seguridad social y económica con que contaba en vida el causante; del principio de reciprocidad y solidaridad entre el causante y sus familiares, por lo que la prestación se otorga en favor de las personas que sostuvieron una relación afectiva, personal y de apoyo con el asegurado; y del principio de universalidad del servicio público de seguridad social, toda vez que con la prestación se amplía la órbita de protección a favor de quienes probablemente estarán en incapacidad de mantener las condiciones de vida adquiridas antes del fallecimiento del causante.

Ahora bien, siendo que el fallecimiento del señor Francisco José Martínez Osorio tuvo lugar el 1° de julio del 2000 (págs.35 a 44, 316 a 321 y 349 a 354, doc.01, carp.01), se evidencia, *prima facie*, que el régimen legal aplicable, es el contenido en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, en su versión original, según el cual, el derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes se causa en favor del grupo familiar del afiliado cotizante que hubiere totalizado 26 semanas al momento de su muerte, o bien, durante el año inmediatamente anterior al deceso en caso de haber dejado de cotizar al sistema; encontrándose acreditado que el señor Martínez Osorio al momento de su muerte aportó, al menos, 660,57 semanas a favor del Instituto de Seguros Sociales, producto de la vinculación laboral con las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN desde el 07 de febrero de 1979 y hasta la fecha de su óbito (doc.GRP-SCH-HL-66554443332211_836-20160921052837.pdf, subcarp.05, carp.01), de donde se sigue que, ciertamente cumplió con los requisitos para dejar causado el derecho a la pensión de sobrevivientes a sus beneficiarios, como bien lo determinó de manera pretérita la administradora del RPMPD con la resolución nro. 11536 del 21 de septiembre de 2001.

2.3.2. El principio de la condición más beneficiosa

Ahora bien, asaz claro es que, en materia de pensión de invalidez y sobrevivencia, el legislador no consagró un régimen de transición², pero la jurisprudencia ha reconocido que el principio de la condición más beneficiosa tiene aplicación directa cuando dentro del ordenamiento jurídico se presenta una sucesión normativa con una mirada retrospectiva, con ocasión de las disposiciones que se incorporan en procura de regular una materia sobre la que ya se había emitido una regulación, principio que tiene por objeto proteger a quienes, a pesar de no tener un derecho adquirido en sentido estricto, se encuentran en una situación jurídica y fáctica concreta por cuanto han cumplido íntegramente con la densidad de semanas necesarias que consagraba la ley derogada para obtener una prestación pensional, siempre que la sucesión normativa hubiere impuesto un trato diferente, más gravoso, y por un motivo no relevante, como lo es el hecho de que no obstante su situación concreta y definida, deba acreditar mayores requisitos.

En desglose de lo anterior, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que al grupo familiar del afiliado que no dejare acreditados los requisitos exigidos en la disposición legal que reglamenta la prestación, le asiste el derecho a que, en virtud del principio de la condición más beneficiosa, la pensión de sobrevivientes sea reconocida bajo la égida de la norma inmediatamente anterior a la vigente que ordinariamente regularía el caso, siempre en cuando se esté ante un cambio normativo.

Llegados a este punto del sendero emerge un primer colofón, cual es, que la aplicación de la condición más beneficiosa es sucedánea al compendio normativo que directamente regule el derecho a la pensión de sobrevivientes, en otras palabras, solo es dable acudir a una disposición anterior cuando el afiliado no cumple con los presupuestos legales vigentes para la causación del derecho en favor de sus beneficiarios, pues de lo contrario, en virtud de los principios de aplicación en el tiempo de la legislación de seguridad social y de retrospectividad, se privilegia el reconocimiento del derecho pensional al luz de la norma que se encuentre vigente al momento de producirse la contingencia de la muerte del afiliado.

Al punto, esta Corporación memora, prohijando los predicamentos de la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral que, *“...por regla general, el derecho a la prestación pensional de sobrevivientes debe ser dirimido con base en la norma que se encuentra vigente al momento de la muerte del causante, en razón a que las leyes sociales son de aplicación inmediata y, en principio, rigen hacia el futuro. Al efecto, luce imperativo recordar que el artículo 16 del CST impone la obligación de aplicar los nuevos preceptos que regulan situaciones jurídicas de carácter general desde su vigencia, ello sin afectar los derechos adquiridos. En*

² “Esta Corte, en sentencia CSJ SL4650-2017, a la cual se remite, explicó que de vieja data ha sostenido que la primera investigación que debe hacer el juez al dictar el acto jurisdiccional, consiste en la selección de la norma aplicable, o sea, determinar la existencia y validez de esta. Será necesario entonces que considere los problemas de la ley en el tiempo y en el espacio, precisando los límites personales, temporales y espaciales de la disposición jurídica. En ese horizonte, es criterio reiterado de esta Corporación que la regla general es la de que la contingencia está cobijada por la norma de seguridad social vigente al momento de la ocurrencia del evento según la prestación pensional correspondiente, esto es, para la pensión de sobrevivientes, la que esté en vigor a la calenda de la muerte del afiliado o pensionado”. CSJ SL835 de 2023.

esa dirección, la Corte ha reiterado que la regla general es la de que «la contingencia está cobijada por la norma de seguridad social de la prestación pensional correspondiente vigente al momento de su ocurrencia, esto es, para la pensión de sobrevivientes, la que está en vigor a la calenda de la muerte del afiliado o pensionado». CSJ SL1632 de 2023).

Entonces, retomando la idea sobre la cual viene discurriéndose, se exhibe incontrastable que, si bien es cierto, el señor Francisco José Martínez Osorio, cumple con los requisitos y directrices previstas en el artículo 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de esa misma anualidad para la causación del derecho pensional de sobrevivientes, también lo es que, cumplió con las exigencias que dan lugar a conceder la pensión de sobrevivientes conforme con el artículo 48 de la Ley 100 de 1993, en su redacción inicial, lo que de suyo comporta la prohibición de acudir a una normatividad diferente ni aun bajo el principio de la condición más beneficiosa como erróneamente lo pregonan la censura.

De manera similar, no es dable otorgar al causante la pensión de jubilación consagrada en la Ley 33 de 1985, bajo el amparo del régimen de transición pensional establecido en el artículo 36 de la ley de seguridad social, en tanto en cuanto, el causante señor Francisco José Martínez Osorio, al momento de su muerte, el 1° de julio del 2000, contaba con solo 44 años de edad, dado que la fecha de nacimiento corresponde al 14-ene-1956 de acuerdo con su cédula de ciudadanía (doc.GRP-HPE-ES-CC-70075899_3.pdf, subcarp.05, carp.01), no cumpliendo así con el requisito de la edad mínima de 55 años establecida en el canon 1³ de la mencionada Ley 33 de 1985, para así conceder la prestación económica. En consecuencia, se asoma una situación que no se puede dejar de lado, esto es, que, el señor Martínez Osorio no generó un mejor derecho que por su muerte fuera transmisible a su cónyuge y demás beneficiarios que actualmente buscan amparo en esta instancia.

Por lo visto, fluye palmar que conceder tal prestación según la tesis propuesta por la impugnante, sería tanto como desconocer la exégesis y el alcance del marco regulatorio el establecido por el legislador para la causación y el disfrute de los derechos pensionales.

Finalmente, conviene advertir que, en cuanto al importe de las agencias señaladas en primera instancia, no es esta la oportunidad procesal para debatirlo, pues, en los términos del artículo 366 numeral 5° del estatuto procesal, “[l]a liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas”; por lo que será en sede de la primera instancia donde los accionantes tendrán la oportunidad de rebatir la cuantía de las

³ Ley 33 de 1985. Artículo 1.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

agencias en derecho y de las expensas que se aprueben con los medios de impugnación legalmente establecidos.

Como colofón de lo expuesto, y atendiendo a las consideraciones fáctica, jurídicas y probatorias explicitadas con suficiencia, se dispondrá por la Sala la confirmación de la sentencia de primer grado, en cuanto absolvió a COLPENSIONES E.I.C.E. y a las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN de todas y cada una de las pretensiones formuladas en su contra por parte de los señores SONIA DORIS MONTOYA LÓPEZ, CAROLINA MARTÍNEZ MONTOYA y SANTIAGO MARTÍNEZ MONTOYA.

3. COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 y 366 del CGP, y en atención a que el recurso formulado por SONIA DORIS MONTOYA LÓPEZ, CAROLINA MARTÍNEZ MONTOYA y SANTIAGO MARTÍNEZ MONTOYA no alcanzó prosperidad, a su cargo se impondrán las costas, en atención a lo dispuesto en el artículo 366 del CGP. De conformidad con el Acuerdo PSAA 16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, se fijan como agencias en derecho para la segunda instancia de manera proporcional y en favor de la demandada COLPENSIONES E.I.C.E., la suma de un salario mínimo legal mensual vigente, equivalente a \$1.160.000.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, Sala Quinta de Decisión Laboral**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

4. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, el 30 de noviembre de 2022, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL impulsado por SONIA DORIS MONTOYA LÓPEZ, CAROLINA MARTÍNEZ MONTOYA y SANTIAGO MARTÍNEZ MONTOYA, en contra de COLPENSIONES E.I.C.E. y donde se vinculó como llamada en garantía a las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP, según y conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo del extremo plural activo conformado por SONIA DORIS MONTOYA LÓPEZ, CAROLINA MARTÍNEZ MONTOYA y SANTIAGO MARTÍNEZ MONTOYA, fijándose como agencias en derecho para la segunda instancia de manera proporcional y en favor de la demandada COLPENSIONES E.I.C.E., la suma de un salario mínimo legal mensual vigente, equivalente a \$1.160.000.

Lo resuelto se notifica mediante EDICTO, prohibiendo el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertido en la reciente providencia AL2550-2021 del 23 de junio de 2021, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES
Magistrado



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario